



Julían Hernández Aguirre

ABOGADO
ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO
MG. EN DERECHO PÚBLICO

Doctor
VICTOR HUGO AGUIRRE CEBALLOS
Juez
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
Cartago, V.

Asunto : Contestación demanda
Radicado : 76-147-33-33-001-2022-00385-00
Medio de control : Reparación Directa
Demandante : AMALIA ROJAS FRANCO
olsuafra28@hotmail.com
olgasuarezfranco1964@gmail.com
Demandados : Empresa de Servicios Públicos de Roldanillo S.A.
E.S.P. y Otros

JULIÁN HERNÁNDEZ AGUIRRE mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No 94.275.139, de La Unión, Valle, de profesión Abogado con Tarjeta Profesional No. 216.046 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura como apoderado de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO S.A. E.S.P.**, con domicilio principal en el Municipio de Roldanillo Valle, demandado en el proceso de la referencia, debidamente acreditado mediante el poder que se adjunta al presente, en ejercicio de las facultades que mediante el mismo se me confieren dentro del término legal, comedidamente procedo a **CONTESTAR LA DEMANDA** formulada por AMALIA ROJAS FRANCO, para lo cual me permito precisar acerca de los hechos y los actos cuestionados en la demanda:

I. EN CUANTO A LOS HECHOS

HECHO 1: Es la información que aporta la parte demandante del proceso.

HECHO 2: No nos consta, nos atenemos a lo que resulte probado en el transcurso del proceso.

HECHO 3: De conformidad con la historia clínica, se evidencia el ingreso al hospital.

HECHO 4 a 11: La información suministrada está acorde al registrado en la historia clínica y es la que aporta la parte demandante.



HECHO 12: No nos consta, nos atenemos a lo que resulte probado en el transcurso del proceso.

HECHO 13: Es la información que aporta la parte demandante del proceso.

II. EN CUANTO A LAS PRETENCIONES

Me opongo rotunda y categóricamente a cada una de las pretensiones de la demanda por carecer de fundamentos de hecho y de derecho, en razón a que estas carecen de fundamento factico, jurídico, probatorio y legal, que hagan viable su prosperidad y en especial a que se declare responsable al A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ROLDANILLO S.A. E.S.P., toda vez que no hay elementos que determinen su responsabilidad en el daño sufrido por la señora AMALIA ROJAS FRANCO, por cuanto no existe legitimación en la causa por pasiva, por cuanto la empresa no tiene la competencia de realizar el mantenimiento, reparación y vigilancia de las obras públicas.

III. EXCEPCIONES DE MÉRITO

1. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA

Dentro del caso objeto del debate, el principio de legalidad respecto de las autoridades públicas se constituye en el fundamento para desarrollar sus competencias, lo anterior en virtud de lo establecido por el artículo 121 de la Constitución Política, que reza lo siguiente:

“Artículo 121. Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley.”

De acuerdo con el artículo ninguna autoridad pública puede ejercer funciones diferentes a las atribuidas expresamente por la Constitución y la Ley, lo que permite concluir que la competencia se incorpora como presupuesto de validez de los actos o actuaciones que son proferidos por cada órgano estatal. Esto ha permitido a la doctrina desarrollar el concepto de contenido obligacional, según el cual existen como consecuencia del principio de legalidad prohibiciones y límites a la autonomía de la voluntad estatal y esto influye de manera diáfana en la limitación de posibilidades en la adopción de decisiones.

A este respecto se concluye que, de acuerdo al concepto de contenido obligacional, un órgano del estado puede actuar únicamente guiado por el marco competencial conferido por la Constitución y/o la Ley; asimismo la



Julián Hernández Aguirre

ABOGADO
ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO
MG. EN DERECHO PÚBLICO

actuación desplegada en pro de dar cumplimiento a ese marco, debe sujetarse a las reglas de procedimiento establecidas con anterioridad para su desarrollo.

Ahora bien, una vez estudiado y analizado el contenido del libelo que presuntamente compromete a las entidades demandadas dentro del caso concreto, se concluye que no existe prueba alguna ni norma jurídica que permita evidenciar que fue la omisión o actuación de la Empresa de Servicios Públicos de Roldanillo S.A. E.S.P. que diera pie a la producción del daño antijurídico por el cual se demanda.

2. INNOMINADAS.

Respetuosamente solicito a Su Señoría que, en virtud de sus facultades legales y en estricto cumplimiento del principio de justicia procesal, se sirva decretar de oficio la existencia de todos los hechos excepcionales que a favor de mi defendido se encuentren probados dentro del trámite del presente proceso.

IV. PRUEBAS

Solicito comedidamente se tengan como pruebas las que obran en el expediente, y decretar las siguientes:

Documentales

Para que se tengan como pruebas de los hechos en los que se basan las excepciones pido se tengan como tales los documentos anexos, así:

- a) Poder para actuar, debidamente otorgado por el representante legal de la entidad
- b) Acta de Posesión y documentos del Representante Legal del Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Roldanillo S.A. E.S.P., señor WILDER ANTONIO PINO CASTAÑO.
- c) Copia de los Estatutos de la Empresa.

V. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO.

Ha establecido el Consejo de Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección C que *"La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el juez se pronuncie*



frente a las súplicas del libelo petitorio. (...) la legitimación en la causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia favorable a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo activo significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, mientras que, desde la perspectiva pasiva de la relación jurídica – procesal, supone ser el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el derecho o interés que es objeto de controversia. (...) la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina la presentación de la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado o que hayan sido demandadas (...) la legitimación en la causa no se identifica con la titularidad del derecho sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es la llamada a discutir la misma en el proceso.”

La vigilancia del mantenimiento de obras públicas es una función que esta atribuida a la administración central del Municipio de Roldanillo, a través de la Secretaria de Planeación, por lo tanto no es una función que deba desarrollar la Empresa de Servicios Públicos de Roldanillo S.A. E.S.P. tal como se aprecia en los estatutos de la empresa que se anexan al proceso, ya que a misma está encaminada a “la prestación, operación, mantenimiento, explotación, organización, comercialización y gestión total o parcial de los servicios públicos de distribución y transporte de gas combustible con sujeción a las normas legales que regulan la materia (...)” por lo tanto de acuerdo a la falla deprecada por la parte demandante, la empresa de Servicios Públicos de Roldanillo S.A. E.S.P., no tiene nada que ver con la vigilancia de la ejecución de obras públicas en el municipio, diferentes a las relacionadas con su operación de servicios públicos, lo cual no se aprecia en el libelo de la demanda.

Por otra parte, el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado, al cual se adscribe tal acción, encuentra su fundamento constitucional en el artículo 90 de la Carta Magna, este artículo establece el deber del Estado de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, ocasionados por la acción u omisión de las autoridades públicas, siendo el elemento fundamental de esta responsabilidad es la existencia de un daño que la persona afectada no está legalmente obligada a soportar.

Es evidente en este contexto normativo que, para determinar la responsabilidad, no importa si la actuación u omisión de la Administración fue



Julían Hernández Aguirre

ABOGADO
ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO
MG. EN DERECHO PÚBLICO

legal o no, ya que la antijuridicidad no se refiere a su comportamiento, sino al daño sufrido por el afectado, el cual puede surgir incluso de una actuación legítima de la Administración. Sin embargo, la jurisprudencia sigue aplicando los regímenes de imputación de responsabilidad desarrollados a lo largo del tiempo, ya que estos simplifican el proceso de calificación de la conducta estatal y la determinación de la existencia del daño y del nexo causal entre este y la actuación estatal.

Es ampliamente reconocido que la existencia de responsabilidad requiere tres elementos esenciales e ineludibles: el daño, el hecho que lo origina y un vínculo causal que conecte el daño con la acción u omisión del agente causante.

El vínculo causal se define como la relación precisa y eficaz entre el hecho generador del daño y el daño mismo, como se demuestra en las diversas jurisprudencias y la doctrina, es así que para imputar un resultado a una persona y declararla responsable por su acción u omisión, es fundamental determinar si existe una relación de causa y efecto entre ellos.

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido consistente en afirmar que el vínculo causal debe ser probado por el demandante en todos los casos, independientemente de si la responsabilidad se basa en la culpa, la negligencia o en algún régimen de responsabilidad objetiva.

Es importante destacar que el vínculo causal es un componente independiente del daño y del fundamento legal, y no puede ser presumido como ocurre con la culpa o la negligencia, es por lo tanto importante comprender que la causalidad, como elemento, se refiere a la observación objetiva de una relación natural de causa y efecto, mientras que la culpabilidad, como fundamento, implica una evaluación subjetiva de la conducta u omisión del causante.

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha oscilado entre los regímenes subjetivo y objetivo de responsabilidad cuando se trata de daños causados por obras públicas. Así, dependiendo de las circunstancias, ha optado por señalar que en algunos asuntos se configura una falla en el servicio por una falta de diligencia en la prestación, mientras que en otros ha considerado que la administración ha creado un riesgo excepcional que excede las cargas que ~~deben~~ asumir los particulares.



Julían Hernández Aguirre

ABOGADO
ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO
MG. EN DERECHO PÚBLICO

Hasta la fecha presente, el Consejo de Estado ha superado todo el debate en torno a la presunción de culpabilidad, causalidad y responsabilidad en todos los regímenes, tanto subjetivos como objetivos, la jurisprudencia de dicho tribunal ha establecido de manera clara que en los casos que involucren un régimen objetivo de responsabilidad, no se presume la culpabilidad ni la causalidad, en cambio, es un régimen en el cual el demandante debe demostrar todos los elementos de la responsabilidad, incluida la relación causal.

El nexo de causalidad, como lo ha dicho tanto la Corte Suprema de justicia¹, como el Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia, debe ser probado en todos los casos. Así, por ejemplo en sentencia del 2 de mayo de 2002 dijo el Consejo de Estado: *"El accionante también tiene que demostrar en juicio la causalidad adecuada entre el daño padecido y la conducta de riesgo imputada al Estado mediante prueba directa o indirecta, porque la ley no ha señalado en materia de relación causal ni presunciones legales respecto de las cuales, probado un hecho (s) el legislador infiera su causalidad adecuada, ni tampoco los conocimientos del juez sobre la realidad social lo autorizan para deducir con certeza el nexo de causalidad eficiente y determinante. La prueba del nexo puede ser: a) directa, mediante los medios probatorios que lo representan por sí mismo y/o b) indirecta, mediante indicios; este medio de convicción lógico indirecto, requiere de la demostración de unos hechos indicadores que apunten con fuerza el hecho indicado..."*.

En el caso presente, a parte de la falta de legitimación en la causa por pasiva, la demandante no presenta evidencia que pueda establecer de manera concluyente que la Empresa de Servicios Públicos de Roldanillo S.A. E.S.P. sea la responsable del daño sufrido por la señora AMALIA ROJAS, la mera deducción subjetiva de la demandante sobre la supuesta falla de la administración, y de la empresa sin aportar las pruebas que sustenten este vínculo o nexo causal, no es suficiente para sostener dicha afirmación.

VI. CONDENA EN COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO

Teniendo en cuenta la conducta asumida por la parte demandante dentro del presente proceso, ante la carencia de fundamento legal para instaurar la presente acción y por alegar a sabiendas, hechos contradictorios a la realidad, respetuosamente se solicita al despacho que se condene en costas al demandante, incluidas las agencias en derecho. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 365 y ss. del Código General del Proceso.

¹ Corte Suprema de justicia, Sala de Casación Civil, sentencia 23 de junio de 2005, expediente 058-95



Julián Hernández Aguirre

ABOGADO
ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO
MG. EN DERECHO PÚBLICO

VII. ANEXOS

Se establecen como anexos, los documentos mencionados en el acápite de pruebas.

VIII. NOTIFICACIONES

Las notificaciones para el presente proceso, se recibirán en la Carrera 7 No 13 -35 del Municipio de Roldanillo, o al email atencionalcliente@serviciospublicosroldanillo.com

Del señor Juez,

Cordialmente,

JULIÁN HERNÁNDEZ AGUIRRE

C.C. No 94.275.139

T.P. No 216.046 del C.S.J.

Señores
JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
CARTAGO – VALLE

Asunto: OTORGAMIENTO DE PODER

Medio de Control: REPARACIÓN DIRECTA
RADICADO: 76-147-33-33-001-2022-00385-00
DEMANDANTE: AMALIA ROJAS FRANCO
DEMANDADO: MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE, ACUAVALLE S.A.
E.S.P., EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ROLDANILLO S.A E.S.P., CELSIA
S.A E.S.P.

WILDER ANTONIO PINO CASTAÑO, mayor de edad, vecino del Municipio de Roldanillo Valle, identificado con la Cédula de ciudadanía No. 16.552.183 expedida en Roldanillo Valle, obrando en nombre y representación de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ROLDANILLO S.A E.S.P E.P.R, conforme al acta de posesión N° 010 del 01 de enero de 2024, atentamente concurre ante su Despacho, para manifestar que confiero poder especial, amplio y suficiente al Doctor JULIAN HERNANDEZ AGUIRRE mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.275.139, de profesión Abogado con Tarjeta Profesional No. 216.046 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura como apoderado principal para que represente a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ROLDANILLO S.A E.S.P E.P.R dentro del proceso de Reparación Directa que se adelanta en su despacho bajo el radicado No. 2022-00385-00, adelantada por AMALIA ROJAS FRANCO.

El abogado antes mencionado cuenta con las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, así mismo queda facultado para notificarse en nombre de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ROLDANILLO S.A E.S.P E.P.R, solicitar copias, interponer recursos, además de conciliar, transigir, sustituir, desistir, renunciar, reasumir y en general todas aquellas necesarias para el buen cumplimiento de su gestión.

Ruego a su despacho conceder personería en la forma y términos del presente mandato.

Atentamente,


WILDER ANTONIO PINO CASTAÑO
GERENTE


EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ROLDANILLO S.A E.S.P E.P.R

Acepto,


JULIAN HERNANDEZ AGUIRRE

C.C No. 94.275.139

T.P 216.046 Consejo Superior de la Judicatura

	MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA		Página 1 de 2
			CÓDIGO:
	GESTION DOCUMENTAL		Versión: 02
			Fecha: 03-05-2007

280.06.8

ACTA DE POSESION N° 010

ACTA DE POSESIÓN CORRESPONDIENTE AL SEÑOR WILDER ANTONIO PINO CASTAÑO EN EL CARGO DE GERENTE DE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ROLDANILLO S.A. E.S.P. E.P.R, CARGO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION.

Ante el Despacho de la Alcaldía Municipal de Roldanillo, hoy primero (01) de Enero del 2024, Compareció el señor WILDER ANTONIO PINO CASTAÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 16.552.183 de Roldanillo, con el fin de tomar posesión del cargo de **GERENTE DE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ROLDANILLO S.A. E.S.P. E.P.R** el cual fue asignado por Decreto N° 004 del 01 de Enero de 2023. En tal virtud el señor Alcalde, ante su Secretaria le recibió juramento de conformidad con el artículo 122 de La Constitución Política de Colombia y bajo esta gravedad, prometió cumplir bien y fielmente a su legal saber y entender con los deberes que el cargo exige.

Acto seguido el posesionado presentó los siguientes documentos: Cédula de ciudadanía No. 16.552.183 de Roldanillo.

Manifestó bajo la gravedad de juramento, no estar incurso en causal alguna de inhabilidad general o especial, de incompatibilidad o prohibición de las establecidas por los Decretos 2400 de 1968, 1950 de 1973, Ley 4ª de 1992, Ley 200 de 1995, y demás disposiciones vigentes para el desempeño de empleos públicos.


Se adhiere y anula estampilla pro hospitales universitarios correspondientes al 2% de la asignación mensual de acuerdo a la ordenanza 301 de diciembre 30 de 2009 de la Gobernación del Valle del Cauca y el 1% de la estampilla pro cultura del Municipio de Roldanillo.

Por ser el cargo de LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION se extiende y firma la presente diligencia, como corresponde, por los que en ella intervienen.


JAIME RIOS ALVAREZ
 Alcalde Municipal


WILDER ANTONIO PINO CASTAÑO
 El Posesionado

ELABORO: MG. JULIAN HERNANDEZ AGUIRRE – ASESOR JURIDICO EXTERNO
 REVISO: MG. JULIAN HERNANDEZ AGUIRRE – ASESOR JURIDICO EXTERNO
 APROBO: JAIME RIOS ALVAREZ – ALCALDE MUNICIPAL

	MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA	Página 1 de 1
		CÓDIGO:
	GESTION DOCUMENTAL	Versión: 02
		Fecha: 03-05-2007

200.55.1

DECRETO NRO. 004
(01 ENE. 2024)

POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO ORDINARIO

El Alcalde Municipal de Roldanillo Valle del Cauca, en uso de sus facultades legales constitucionales, y en especial las contenidas en el artículo 315 numeral 3 de La Constitución Política de Colombia y el artículo 91, literal d numeral 2 de la ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012 y el artículo 80 de los Estatutos vigentes de la Empresa de Servicios Públicos de Roldanillo S.A. E.S.P. E.P.R.

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO: NOMBRAR con carácter ORDINARIO, al Señor **WILDER ANTONIO PINO CASTAÑO** identificado con cedula de ciudadanía **16.552.183**, en el cargo de **GERENTE**, Código **039** Grado **01** en la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ROLDANILLO S.A. E.S.P. E.P.R.** de la planta de cargos de esa entidad.

ARTICULO SEGUNDO. El presente Decreto rige a partir del 01 de enero de 2024.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Roldanillo, a los 01 días del mes de enero de 2024.


JAIME RIOS ALVAREZ
 Alcalde Municipal

ELABORO: MG. JULIAN HERNANDEZ AGUIRRE – ASESOR JURIDICO EXTERNO
 REVISO: MG. JULIAN HERNANDEZ AGUIRRE – ASESOR JURIDICO EXTERNO
 APROBO: JAIME RIOS ALVAREZ – ALCALDE MUNICIPAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **16.552.183**

PINO CASTAÑO

APELLIDOS
WILDER ANTONIO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **05-FEB-1979**

ROLDANILLO
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67
ESTATURA


A+
G.S. RH

M
SEXO

30-SEP-1997 ROLDANILLO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-3109100-00162792-M-0016552183-20090714 0013447414A 1 3180101294

SUPERIOR DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA DE LA JUDICATURA
334641 RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO

216046	09/05/2012	27/04/2012
Tarjeta No.	Fecha de Expedición	Fecha de Grado

JULIAN
HERNANDEZ AGUIRRE
04275139 VALLE
Cédula Consejo Seccional

COOPERATIVA BOGOTÁ
Universidad



RICARDO H. MONROY CHURCH
Presidente Consejo Superior de la Judicatura



FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANIA

